

C.A. de Santiago

Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

En esta causa RUC N° 1700264150-K, RIT N° 264-2020, del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, por sentencia de uno de abril de dos mil veintiuno, se condenó a **Patricio Alberto Donoso Villalobos** y a **Carla Jaqueline Castro Mayta**, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias, en calidad de autores del delito consumado de trata de personas con fines de explotación sexual previsto y sancionado en el artículo 411 quáter del Código Penal, perpetrado entre los días 22 de febrero y 19 de marzo de 2017, en la persona de la víctima de iniciales A.M.T., en la comuna de Salamanca.

En contra de esa decisión la defensa de los condenados interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública del pasado 18 de mayo, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy.

CONSIDERANDO:

1°.- Que se esgrime que en la especie, se verifica la causal de nulidad que contempla el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación a lo dispuesto en los artículos 342 letra c) y 297 inciso 2° del mismo código, en atención a que el tribunal en el fundamento 9° de su fallo concluyó la existencia del hecho punible calificado de trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo -después de referirse la obligación de fundamentación de las decisiones judiciales y a la conceptualización del vicio que se acusa- asevera que los jueces transgredieron los principios de la lógica, de la razón suficiente y de la no contradicción. En efecto, el tribunal no realizó una exposición clara, lógica y completa de los elementos probatorios aportados por las fuentes de prueba de cargo, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 297, ya sea porque omitió consignar el contenido exacto de la información aportada por ellos; o porque omitió hacer referencia a determinado medio de prueba; o porque no se hizo cargo de la información derivada



de los mismos; o porque ello no sucedió respecto de la prueba incorporada con ocasión del contraprueba por el contraexamen de la defensa; o porque omitió las conclusiones para el examen de la defensa; o porque omitió las conclusiones para cerrar la valoración de la prueba. Así, en el considerando 8° se indican los motivos por los cuales se desestimó la tesis absolutoria planteada por su parte, sin considerar sus alegaciones en orden a una “imposibilidad situacional” respecto de la dinámica de los hechos, ya que si bien existieron puntos no totalmente claros en la prueba que se rindió, todos ellos son periféricos y carecen de relevancia para establecer el núcleo fáctico por el que se condenó a los acusados. Ello se explica textualmente en el recurso, como sigue:

“1.- En efecto poco importaron el Otro Medio de Prueba N° (Grabación de Video de la entrevista de la víctima de iniciales A.T.M.T.); la Prueba Documental signada con el N° 1 del Ministerio Público (Registro de conversaciones por WhatsApp) y; la declaración del testigo del Ministerio Público, signado con el N° 2, de iniciales HILA, para que el Tribunal fijara los hechos entre el 22 de febrero y el 19 de marzo del 2017, periodo en el cual la víctima ATMT, fue supuestamente golpeada, encerrada, golpeada y obligada a mantener relaciones sexuales forzadas. Esto es, poca relevancia para fijar el día en que comienzan los hechos el mensaje de (Prueba Documental N° 1) WhatsApp entre ATML e HILA, del 16 de marzo a las 21.00 horas aproximadamente señalara que “No me dejan salir no quieren dar el papel de la PDI” y, posteriormente a 22.00 horas aproximadamente le envía la clave que tenían entre ellos para comunicarse: “No te preocupes Ya hable con la señora ella está k me dice k me lo va a buscar (primito no te preocupes todo está muy bien) yo soy muy escandalosa”, lo que fue ratificado lo señalado precedentemente, durante el testimonio del testigo de iniciales HILA e incluso con (Otro Medio de Prueba N° 19) grabación de la declaración de la víctima de iniciales ATMT ante el Ministerio Público.

2.- No tuvo importancia para arribar a la condena, la declaración de la víctima que señala que en una semana eran muchos los días que la drogaban y que ingresaban hombres a su pieza, incluso por noche



podían ser 2 a 5 veces, lo que era opuesto al propio relato de la víctima y testigo HILA, quienes señalan que el 16 de marzo fue encerrada y el 19 de marzo escapa de Salamanca. Poca o ninguna relevancia tuvo una versión sobre la otra a pesar que la omitida era corroborada con la prueba documental N° 1 del Ministerio Público los registros del WhatsApp.

3.- No tuvo importancia para arribar a la sentencia condenatoria de mis representados el hecho que la víctima señaló que la casa de calle Freire N° 505 de Salamanca era aislada y se encontraba lejos del local y del terminal de buses, en circunstancias de lo expuesto en contra examen de los testigo Javier Cárcamo y Sebastián Ortega, en cuanto a no estar aislada ni lejos del local ni del terminal de buses.

3.- No tuvo importancia para arribar a la sentencia condenatoria de mis representados el hecho que la víctima señaló en cuanto a que el inmueble de calle Freire N° 505 y del Local El Paraíso era cuidado por varios hombres, y lo expuesto en contra examen de los testigos Javier Cárcamo y Sebastián Ortega, en cuanto a que no se detectó la presencia de vigilancia de hombres en el local ni la casa, como tampoco que fueran objeto de seguimientos por parte de mis representados.

4.- No fue relevante para llegar a la sentencia condenatoria el hecho que señala la víctima que mis representados le pidieron su tarjeta de turismo de la PDI cuando llegó a Salamanca y que aseguró tener en su poder en todo momento DNI y que no poseía pasaporte; sin embargo la sentencia afirma la existencia del pasaporte y que lo mantuvo consigo la víctima igual que su DNI.

5.- Que igualmente poco importante fue para arribar a la condena, el que no se estableciera claramente la extensión del tiempo durante el cual la víctima ATMT, estuvo encerrada, golpeada, drogada y obligada a mantener relaciones sexuales forzadas, ya que como es obvio esto habría sido esencial al momento de valorar los resultados del informe del Servicio Médico Legal y, del meta peritaje del doctor Luis Ravanal Zepeda, el cual avalando el resultado del SML señala: “Se detectaron dos lesiones contusas de tipo equimótico inespecíficas en etapa de



resolución, cuya data en base a la estimación cromática las situaría en un período de tiempo inclusive previo a la semana que señala habría sido agredida, con una data estimada entre 7 a 10 días, pudiendo ser incluso mayor, las cuales no concuerdan con los mecanismos de agresión descritos en la denuncia, entre ellos, cachetadas faciales, pellizcos, sujeción con fuerza, etc., por lo que no es posible vincularlas en forma segura con los hechos denunciados dada la falta de concordancia respecto a su data, localización anatómica y patrón morfológico”.

6.- No le importó al tribunal para condenar a mis representados que la víctima ATMT, señalara que no conocía el nombre de mi representado y señalara un seudónimo el cual, no le pertenecía, sin embargo en la Sentencia en su Considerando Duodécimo se afirma: “(...) con el mérito del testimonio de la víctima de los hechos, quien los sindicara por sus nombres y en su calidad de administradores del local”.

7.- Poco importo para arribar a la condena que la Prueba Documental N° 1, Registro de conversaciones por WhatsApp entre el testigo H.I.L.A. y la víctima A.M.T. entre el 24/02/2017 y el 17 de marzo de 2.017, señala que el viaje de la víctima ATMT, estaba planificado desde el día anterior al supuesto encierro, donde señala precisamente el viaje de Salamanca a Santiago: 15 de marzo de 2.017, 22 horas aprox. de A.T.M.T. a H.I.L.A.: “El domingo viajo a Santiago. Y, el lunes me embarco. Al avión. A qué hora quieres tu viaje. ??? A las 11 de la mañana. Precio. 79 mil pesos. Aerolínea. El aeropuerto está en Pudahuel. Aerolínea boba. Conozco Santiago boba. No se. Ok. Pero en la oficina preguntas. Po. Ok. Y porque no vienes domingo más temprano ??? X k me falta juntar la plata para mi mamá. Vienes el domingo en la madrugada. Y tengo que hacer la plata. No es mucha la diferencia. Si ya lunes po. Yo salgo domingo a las 11 entiende. Y po. Estoy claro. Y llego lunes Blesa. 5:45”. En efecto, no importó para llegar a la condena que se haya planificado el viaje previo al encierro, y que se cumpla plenamente dentro de lo previsto.



8.- Por último, la versión de la víctima de iniciales ATMT, fue acogida completamente, al tenor de lo señalado en el Considerando 12° señala: “Participación. Que, la participación de los acusados en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual resultó plenamente acreditada, con los mismos medios de prueba indicados y especialmente, con el mérito del testimonio de la víctima de los hechos quien los sindicara por sus nombres y en su calidad de administradores del local El Paraíso. En efecto, en primer término, la víctima dio cuenta de ello a todos quienes conocieron de su relato, indicando que este tipo de actividades no solo se verificaban en el citado local, sino que también en la casa de éstos y en lugares que los clientes determinaran, ya que podían trasladar a las chicas mediante el pago de una suma mayor.”

Continúa el recurso aseverando que el tribunal consideró poco importante al momento de concluir la condena que en el motivo 8° sostuvo que “concuerda con la defensa que lo óptimo habría sido conocer el relato de la víctima de primera fuente (...)”, es decir, no fue relevante al momento de resolver, atendido que se confirió a la grabación la calidad de un testimonio, aun cuando se reconoce que esto generó un perjuicio a los imputados. Por ello, no otorgó importancia a que esta declaración no se prestara ante algún tribunal y sujeto a las reglas del contrainterrogatorio con el fin de controlar la credibilidad del relato, coherencia, verosimilitud y consistencia con los demás antecedentes del juicio. Así le fue vedado a la defensa dicha posibilidad, mediante el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 309 y 332 del Código Procesal Penal, permitiendo el debido equilibrio o igualdad de armas entre las partes, constituyendo un elemento del debido proceso.

En relación a este punto, hace presente que según lo preceptúa el artículo 297 del Código Procesal Penal, la valoración realizada por el tribunal no se corresponde con toda la prueba producida, tal como exige el inciso 2° de la norma citada, ya que para que efectivamente se cumpla la aludida exigencia no basta con enumerar los medios probatorios, sino que se deben indicar las razones que se tuvieron en



cuenta para desestimar algún medio probatorio y preferir otro para conformar la convicción condenatoria.

Por lo expuesto, concluye que existe una fundamentación omisiva, ya que la sentencia no ha valorado la prueba dirimente. Lo anterior se desprende de la lectura de sus considerandos 8° y 9°, ya que en los mismos se exponen ciertos puntos relativos al razonamiento del tribunal, sin señalarse la forma en que a través de la prueba ofrecida se logra arribar a la convicción de condena por un por un delito de “robo con violencia” (sic). En tal sentido el tribunal no indica de manera detallada por qué selecciona ciertas partes de la declaración de los testigos, existiendo diversas contradicciones en la prueba aportada. Así, no se hace cargo del hecho de que la víctima envía mensaje del supuesto encierro con fecha 16 de marzo del 2017 lo que es concordante con lo señalado por el testigo de iniciales HILA (denunciante), fijando cuando supuestamente ocurrieron los hechos; carece también de importancia hacerse cargo de los resultados de los peritajes del SML realizados a la víctima, “lo que junto al resultado del contraexamen de los testigos del Ministerio Público” (sic); que el viaje de la víctima estaba planeado con anticipación al supuesto encierro; no se hace cargo de la inexistencia de prueba científica que avale la denuncia de la víctima; no fue relevante para la condena que no fuese óptima la prueba que la fundamentó según lo aseverado por el propio tribunal en sus considerandos 8 y 12; además se omitió el resultado del contrainterrogatorio de los testigos del Ministerio Público, quienes en general señalan que el lugar donde residía era cercano al lugar de trabajo, no estaba aislado, no había indicios de que varios hombres estuvieran a cargo del seguimiento de las personas que trabajaban con los condenados. El mensaje que fija el inicio de los hechos denunciados que dan curso a este juicio penal, el 16 de marzo de 2017, pone en duda si aquellos efectivamente ocurrieron, en atención a que el tribunal debe manifestar por qué le da mayor valor a un medio de prueba que a otro, y no podría, ya que justamente la sanción es la configuración del vicio de nulidad; decidir sobre la base de ciertos puntos, sin indicar los términos exigidos por el artículo 36 del



Código Procesal Penal, más aún cuando en su razonamiento no expone los elementos que configuran el ilícito por el cual condenó y en tal sentido existe una clara omisión, ya que la decisión del tribunal debe estar amparada por la prueba que se rinde. La exposición de los medios de prueba que sirven para confirmar o descartar una hipótesis debe ser completa, considerando que el tribunal debe manifestar en la sentencia las razones que tuvo para desestimar un medio de prueba, lo que en este caso, no existe.

2°.- Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”. Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: “Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.



3°.- Que, entonces, es cierto que la legislación procesal penal no ha dado libertad absoluta a los jueces del fondo a la hora de valorar la prueba rendida y establecer tanto el delito como la participación, pues siempre han de respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que los conduce a resolver en un determinado sentido. Se trata, en fin, más que de no vulnerar principios de la lógica filosófica, simplemente, en la labor de ponderación de la prueba, de respetar el sentido común, la sensatez. La octava acepción de la palabra “lógica” dada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la que más se adecua a la que el legislador menciona en el citado artículo 297: “Modo de pensar y de actuar sensato de sentido común”. Couture resume el significado de las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano”.

4°.- Que esta Corte de manera reiterada ha señalado que la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación al requisito establecido en la letra c) del artículo 342 de ese cuerpo normativo, habilita la revisión de la sentencia desde un doble enfoque. El primero apunta a que la decisión contenga razones y que ellas sean capaces de justificar cómo y por qué se dan o no por probados los hechos que se cuestionan en el recurso; y, en segundo término, es dable examinar que esas razones expresadas se ciñan a los parámetros de valoración probatoria inherentes a la sana crítica, esto es, que no contradigan las reglas de la lógica, de la experiencia o de los conocimientos científicamente afianzados.

5°.- Que, como primera cuestión, es dable tener presente que el recurso de nulidad es de derecho estricto y procede en consecuencia en virtud de las causales y los fines establecidas en forma expresa por la ley, por ende, no conforma una instancia diversa que permita revisar los hechos que se han dado por establecidos en el juicio y en consecuencia para que pueda prosperar no es suficiente que el recurrente meramente exponga como sostén del tópico principal un anunciado de la causal, sino que indiscutiblemente es menester expresar con meridiana certeza la manera cómo el juzgador infringió, en determinados razonamiento, las



reglas de la lógica o desconoció expresamente las máximas de la experiencia y los conocimientos de la ciencia. Asimismo, debe indicarse que la evaluación de la prueba ofrecida y rendida, corresponde exclusivamente a los sentenciadores de la instancia y no admite el control por la vía recursiva, puesto que en tal actividad ejercida discrecionalmente, dichos Jueces son soberanos, razón por la cual el tribunal de alzada en estricto rigor, en la materia reparada, carece de facultades para rectificar o introducir modificaciones al establecimiento de las situaciones fácticas que se hayan tenido por acreditadas en el juicio, con la salvedad que en la determinación de tales supuestos se hayan desatendido los elementos referidos.

Por lo mismo, no se está en presencia de una instancia, desde que la estructura de los sistemas orales parte de la base que el fundamento fáctico de la sentencia debe provenir de la apreciación directa que de las pruebas hacen los jueces durante el juicio. En esa perspectiva, el tribunal de alzada, que no participó en el debate ni presencié la rendición de prueba, carece de la inmediación que se requiere y por ello, solo le corresponde comprobar que los sentenciadores hayan dispuesto de la precisa actividad probatoria para las afirmaciones que se contienen en el fallo y examinar que el razonamiento de la convicción obedezca a criterios lógicos y razonables que permitió la evaluación de las respectivas pruebas en las materias debatidas.

6.- Que el preámbulo en cuestión sirve para develar las falencias en la construcción del recurso de nulidad que se dedujo en estos autos, en tanto se advierte que no desarrolló fundamento lógico alguno vulnerado que no pase por la enunciación de que se transgredieron los principios de la razón suficiente y no contradicción, limitándose a cuestionar de manera genérica, la ponderación que hizo el tribunal oral a la prueba vertida en el juicio, asimilándola a una supuesta infracción de los aludidos principios, pro que redundo, tal como se observa de la enumeración de la prueba que señala, en un examen propio de la misma, como si se tratara de una instancia en que esta Corte pudiera



conocer el mérito de la misma, en otra palabras, el recurso de nulidad se estructura como un recurso de apelación.

Lo dicho, desde luego, impone el rechazo de recurso, ya que dado su carácter de derecho estricto, hace obligatorio su adecuada, completa y correcta fundamentación.

7°.- Que sin perjuicio de lo expuesto, el escrutinio que se predica del fallo, si se entiende que apunta a una supuesta carencia de la fundamentación lógica para establecer que los encartados adecuaron su conducta al tipo penal en cuestión, alegando por intermedio de la causal de nulidad el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, desde ya debe desestimarse, pues las reflexiones vertidas acerca del extremo que interesa es posible advertirlas de un modo extensamente desarrolladas en el motivo 8° y que culmina con la acreditación del hecho, su calificación y la participación en los racionamientos 9°, 10° y 12°. Se evidencia allí un examen pormenorizado de los medios de prueba reunidos y en particular la construcción de los indicios a partir de los cuales los sentenciadores concluyen tanto el hecho punible como la participación que en él cupo a los acusados en el delito por el que fueron condenados. En efecto, el razonamiento se presenta a la luz del tipo penal, sustentado principalmente en los dichos de la víctima (en entrevista video grabada), su primo (H.I.L.A.), los funcionarios policiales que participaron en el procedimiento, escuchas telefónicas, fijación fotográfica de los lugares donde se desarrollaron los hechos y las pericias psicológicas. El hilo conductor del razonamiento es el que sigue:

a) Amy, (víctima) y su primo (Hamlet I.L.A.) dan cuenta que aquella llegó a Chile desde Perú el 13 de febrero de 2017 en busca de empleo (describen las condiciones de pobreza de las que provenía), advirtiéndole en el centro de la ciudad de Santiago un anuncio (apreciado por el tribunal) de ofrecimiento de trabajo como garzona en la Cuarta Región. En ese anuncio se registraban los números telefónicos de los imputados. Esa noche, la víctima se comunicó con Carla Castro Mayta, quien le explicó las condiciones de la prestación de servicios, señalándole, en lo



relevante, que había otras chicas que “hacían otras cosas”, pero que era voluntario. Amy aceptó el empleo;

b) La condenada Castro Mayta en conversaciones con otras mujeres, realizaba idénticas explicaciones respecto de los servicios que aquellas debían realizar, omitiendo la prestación de servicios sexuales. En el mismo sentido, el coimputado Patricio Donoso Villalobos a través de redes sociales hacía el mismo ofrecimiento;

c) El primo de la víctima la acompañó al terminal de buses y le facilitó dinero para el viaje (se adjuntó fotografía del pasaje y conversación vía mensaje de texto una vez arribada a la localidad de Salamanca); acordaron que aquella regresaría el fin de semana. Ello no sucedió, y en las conversaciones que ambos sostuvieron vía mensaje de texto, aquel la notó extraña, pues esta le señaló que quería volver a su país, que no se acostumbraba, solicitándole la compra de un pasaje de regreso. Por aquel medio, también apreció la conducta de la víctima, escuchó audios que daban cuenta de la situación de peligro que sufría y se percató de las amenazas de los imputados y de que el móvil era utilizado por una persona distinta de su prima;

d) Los condenados le proporcionaron a la víctima y a las otras mujeres que se encontraban ahí, habitación y comida, cubriendo todas sus necesidades básicas. Asimismo, a la llegada Amy al local El Paraíso, le requisaron su documentación migratoria;

e) La víctima fue obligada a “hacer privados” -prestar servicios sexuales-, fue encerrada, golpeada, despojada de su celular; además de encontrarse aislada del exterior. Procedieron a drogarla para luego obligarla a mantener contactos sexuales con diversos hombres, bajo amenaza de afectar a su familia;

f) En el local Paraíso se ejercía la prostitución, lo que fue comprobado por un funcionario policial encubierto. Ello se corroboró, además, con las conversaciones telefónicas de los encartados;

g) Esos servicios eran prestados también en la casa de los condenados, evidenciando las escuchas telefónicas las negociaciones con terceras personas relativas al comercio sexual;



h) Muchas de las mujeres extranjeras que se encontraban en el lugar tenían una situación migratoria irregular o no contaban con contrato de trabajo, pudiendo los imputados evadir los controles de la autoridad al ser alertados por terceras personas; oportunidad en que procedían a esconderlas o sacarlas del local;

i) Los servicios que prestaban las mujeres, vestidas con escasa ropa, involucraba la ingesta de alcohol, a lo que se añade que la adquisición de cierta bebida alcohólica por parte de los clientes, les confería el “derecho” para obtener de aquellas un contacto físico distinto al sexual, existiendo en el local espacios acondicionados para tal efecto;

j) La víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad, dada la situación de pobreza extrema que la afectaba tanto a ella como a su familia en su país de origen; poseía escasa educación; tenía la necesidad de generar dinero para enviar a su madre e hija, siendo su primo la única red de apoyo en Chile;

k) Los imputados ofrecían los servicios de las mujeres a través de un catálogo (fotografías) de las mismas;

l) La víctima para obtener la devolución de la documentación migratoria y poder huir del lugar en que permanecía, “convenció” a los condenados que ejercería la prostitución voluntariamente;

m) Amy mediante una maquinación logró escapar de la vigilancia y control de los imputados.

8°.- Que en virtud de esos antecedentes extraídos de la prueba a la que se hizo alusión, el tribunal afincó el siguiente hecho: “Días antes del 22 de febrero de 2017, A.M.T, de 19 años de edad a esa fecha, de nacionalidad peruana, tomó contacto telefónico con los imputados luego de haber visto un cartel, específicamente en paseo Puente, entre las calles Santo Domingo y Catedral, comuna de Santiago, en un muro de la multitienda “La Polar”, que solicitaba garzonas para desempeñarse en shopería en la región de Coquimbo. Carla Castro y Patricio Donoso le indicaron a A.M.T que podía trabajar como garzona. De esta forma A.M.T, quien había ingresado a Chile recientemente, esto es, el día 13 de febrero de ese mismo año, ante la necesidad imperiosa de trabajar y



enviarle dinero a su familia en Perú, se trasladó hasta la ciudad de Salamanca siendo recibida por Carla y Patricio quienes aprovechando su situación de vulnerabilidad, la trasladaron hasta la casa ubicada en calle Freire N°505, Salamanca y luego a un local llamado “El Paraíso Bar”, ubicado en calle Bulnes N°383-C, Salamanca. Sin embargo, luego del transcurso de algunos días le quitaron la tarjeta única de turismo con que había ingresado al país, diciéndole que sin ese documento no podía salir de Chile. Con posterioridad la obligaron a prestar servicios sexuales a los clientes del local. Frente a la negativa de la víctima la encerraron, golpearon, amenazaron y le dieron pastillas con la finalidad de que fuera objeto de tocaciones en distintas partes de su cuerpo y que mantuviera relaciones sexuales forzadas con los clientes, tanto en uno de los privados del local “El Paraíso Bar” como en una habitación ubicada en el domicilio de calle Freire N° 505, Salamanca.

Aquella situación se mantuvo hasta el día 19 de marzo de 2017 cuando la víctima logró huir del lugar”.

9°.- Que es fácil advertir de la lectura y análisis detenido de la motivación 8°, que los reparos que el recurrente endilga al fallo no son tales, desde que ante la contundencia de las declaraciones de la víctima, los testigos y de los funcionarios policiales, unidas a la documental incorporada y las escuchas telefónicas, descartada que fuera la hipótesis alternativa propuesta por la defensa (inocencia por inexistencia del hecho punible por imposibilidad situacional), cabía entonces arribar a la conclusión que, conforme a la concatenación de los hechos, se contiene en la decisión recurrida. En efecto, existe un acabado examen de las probanzas rendidas, la que entrelazada con los elementos del tipo permitieron a los sentenciadores adquirir la convicción de condena, previo a desestimar tanto las metapericias del sicólogo Aldunate García y del médico Ravanal Zepeda como la pericia de Patricia Ángel (de la fiscalía), pues los datos que estas pruebas arrojaron no contravienen el tipo penal, sin que resulte incompatible con el mismo, concluyen y explican, la inexistencia de marcas físicas, rastros de material biológico en la víctima o de droga, dada la naturaleza del delito, la forma en que



se ejerce el comercio sexual y el tiempo transcurrido desde la huida de Amy desde Salamanca y la toma de muestras biológicas. En este mismo orden de ideas, los sentenciadores se hacen cargo de cada uno de los reparos de la defensa, respecto de los que persiste en el presente recurso, incluso de la supuesta vulneración al derecho de defensa por haber introducido en juicio la declaración de la víctima a través de una grabación (lo que por cierto no puede dar pábulo a la causal de nulidad que se dedujo). Ergo, vuelve a develar la estructura del arbitrio que mediante la reiteración de los argumentos no hace más que invitar a esta Corte a rever los razonamientos jurídicos disfrazando tal pretensión bajo la causal de nulidad esgrimida, lo que como se dijo resulta del todo improcedente.

De manera que se evidencia que el análisis de la prueba hecha por el tribunal a quo no solo no vulnera el contenido del artículo 297 del Código Procesal Penal, sino que es precisamente el que pretende dicha norma; se trata de una ponderación lógica, racional, aplicando los jueces del mérito, al decir de Couture, “las reglas del correcto entendimiento humano”, pues contrariamente a lo que pretende el recurrente, se comprobó el hecho y la participación de los condenados en el delito en cuestión; conclusión que por cierto deriva del examen de la totalidad de la prueba rendida, tanto por el ente persecutor como de la defensa.

10.- Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo resta desestimar el recurso de nulidad en estudio.

Y visto, también, lo dispuesto en los artículos **372, 373 letra b), 376 y 385** del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad impetrado por el defensor penal Aldo Toso Delgado, actuando en representación de los condenados Patricio Alberto Donoso Villalobos y a Carla Jaqueline Castro Mayta, , contra la sentencia de uno de abril de dos mil veintiuno, RUC N° 1700264150-K, RIT N° 264-2020, del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, la que, por ende, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra Lilian Leyton Varela.



N°Penal-1581-2021.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministro (l) señora Pamela Quiroga Lorca y por el Abogado Integrante señor Cristian Lepin Molina.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Ministra Suplente Pamela Del Carmen Quiroga L. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a siete de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

